



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE. 14728/2021

**“AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A. c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

En autos Agrocereales La Milonguita SA impugna la Resolución 1.802/2021 del 26/05/2021 que determinó la existencia de deuda por diferencia en las contribuciones ingresadas por los periodos marzo 2013 a enero 2018 por un total de \$ 3.236.533,40 (capital más intereses a valores del 02/07/21) y una multa de \$728.748,17 por lo que se consideró un incorrecto encuadre de la rubrada en el Decreto N° 814/2001, durante los periodos señalados.

Concretamente la apelante rechaza la deuda determinada por entender que no se tuvo en cuenta los planteos por ella efectuados y la falta de producción de la prueba pericial acompañada (balances de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) de la que surgen las ventas totales anuales correspondientes a esos periodos, que a la luz de las resoluciones que dictó la SEPyME arroja como resultado que la infraccionada encuadra como PyME y por ende debe aplicársele la alícuota reducida del 17% y no la del 21% como pretende el organismo. Insiste la presentante en que el organismo fiscal se equivoca al excluirla de la alícuota reducida por ser su facturación, para el periodo inspeccionado, superior a los \$ 48.000.000 que el Decreto 1009/01 y la Resolución 24/2001 fijaron, entendiendo que las posteriores disposiciones que han reformado el texto de la resolución 24/01 no han alterado ese tope en lo que hace al encuadramiento en los incisos a) ó b) del artículo 2° del Decreto 814/2001. En opinión de la apelante, AFIP se aferra a valores congelados soslayando lo que resuelve el correspondiente órgano de aplicación (conf. escrito de impugnación obrante a fs. 6/25 digital).

La demandada rechaza el cuestionamiento argumentando que los agravios vertidos no son más que una disconformidad con lo decidido en el ámbito administrativo pero que en realidad no hay agravios concretos pues en ningún momento demostró que la aplicación efectuada de la norma fuera incorrecta. Es más, de las constancias acompañadas surge qua

Fecha de firma: 16/06/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35799394#325298387#20220614115443166



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Agrocereales La Milonguita SA cuenta con 46 empleados, distribuidos gremialmente en un 80% entre comercio y choferes afectados al mismo. Su actividad es la compra y venta de agroquímicos, cereales e insumos y los balances agregados (correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017) revelan que los montos de facturación fueron: \$ 69.945.388,41 para 2013, \$ 104.157.232,63 para 2014, \$ 112.042.687,82 para 2015, \$ 228.562.719,51 para 2016 y \$ 296.464.692,88 para 2017 (ver fs. 529 Actuación 11229-5003-2018 digital). Tales extremos, a juicio del organismo, son determinantes que debió tributarse en base a la aplicación de una alícuota del 21% en lugar del 17% como se hizo. Ello en virtud de lo dispuesto por el Decreto 814/01 artículo 2° inciso a.

Corresponde la apertura de la presente instancia toda vez que el apelante acompañó un seguro de caución (Póliza N° 28140) emitida por la Compañía Tutelar Seguros de Caución por \$ 2.664.018,30 fin de dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820 (ver fs.66/67).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento habré de propiciar la confirmación de la resolución recurrida.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo –Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada)

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La parte actora en su escrito de impugnación insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras muchas normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEP y ME) razón por la cual solicita se deje sin efecto la determinación de deuda aplicada.

También solicita se la exima del pago de la multa pretendida pues según entiende para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho típico antijurídico y culpable y, en el caso, al encontrarse controvertidas las actas que dieron lugar a la imposición de las sanciones que aquí se atacan, no se encuentra acreditado hecho típico antijurídico alguno ya que el empleador efectuó el cálculo de las contribuciones patronales conforme lo indica la normativa aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Sin perjuicio de lo anterior, y como bien se señala en el escrito de apelación, los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (marzo 2013 a enero 2018) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$135.015) y 10 UMA (\$ 90.010) respectivamente, CSJN. Ac. 12/2022.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 135.015) y 10 UMA (\$ 90.010) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.12/2022).

EL DOCTOR WALTER CARNOTA DIJO:

No puedo compartir la propuesta de mi distinguida colega de Sala.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Agrocereales La Milonguita SA apela la Resolución N° 1.802/2021 que no hace lugar al planteo de revocatoria previamente deducido por la empresa por el que se cuestionaba el ajuste determinado en concepto de diferencias de contribuciones patronales y multa, por incorrecto encuadre de las disposiciones establecidas en el Decreto 814/2001, artículo 2 , en los períodos marzo 2013 a enero 2018.

El recurrente no efectúa el depósito previo de la suma cuestionada (art. 15 ley 18820) Adjunta en su reemplazo una póliza de seguros de caución emitida por Compañía Tutelar Seguros de Caución por la totalidad del monto requerido por AFIP a fin de dar cumplimiento a la exigencia prevista por la norma. Alega dificultad para hacer frente a tal exigencia agregando que en el presente caso se advierte un inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los organismos administrativos.

Ahora bien, el seguro de caución ha sido considerado por el Superior Tribunal de Justicia como un sucedáneo valido del depósito previo,(ver “Orígenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sent del 04/11/2008) por lo que se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

En su memorial recursivo, el apelante sostiene que el cálculo de las contribuciones patronales a su cargo es el correspondiente a la alícuota reducida aplicable a las empresas que se encuentran dentro de los parámetros de una PyME conforme lo disponen las resoluciones dictadas por su autoridad de aplicación de acuerdo a sus ventas totales anuales y no resulta encuadrable en lo establecido en el artículo 2 inc. a del Decreto 814/2001. Sostiene que los valores de ventas totales anuales para ser considerada PyME fueron actualizados por la autoridad de aplicación durante sucesivos años, en función de las siguientes resoluciones modificatorias: Resolución 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015, 11/2016,103/2017, 340/2017 y 519/2018. Realiza un cuadro comparativo de su facturación con relación a las normas señaladas.

La AFIP, por su parte sostiene que no existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

Afirma que en cuanto a la remisión efectuada por el Decreto N° 1009/01 a la Resolución SPyME N° 24/2001, la única finalidad de esa remisión es la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas, pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

de la alícuota de contribuciones patronales es el que surge de dicho decreto, ya que ese aspecto no ha sido modificado. El límite de \$48.000.000 es la definición de PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 a los efectos de la aplicación de su similar N° 814/01, motivo por el cual todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" cuya ventas totales anuales superen los \$ 48.000.000 debe tributar conforme a la alícuota del 21%. El Decreto N° 1009/01, a través de su artículo 1, reglamenta las condiciones de aplicación del artículo 2° del Decreto N° 814/01. Las mismas no pueden ser modificadas sino por una norma que ostente al menos, la misma jerarquía. En otras palabras, el tope de \$48.000.000 establecido por el artículo 1° del Decreto N° 1009/01 podría ser modificado por el PEN mediante la emisión de un nuevo Decreto, manteniéndose inalterable ante el dictado de normas de jerarquía inferior, tal como son las dictadas por la SPyME, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-. El Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la posterior Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN. Se ratifica, entonces, la tipificación de la multa impuesta. El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyME, por remisión a la Resolución N° 24/2001 la que a través de su art. 1°, estableció serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella fijados. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala, a los efectos de los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

Dado que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME y no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyME en la actividad comercial. Situación, por otra parte, que se continúa en sucesivos periodos posteriores.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación de la infraccionada arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002,147/2006,21/2010,50/2013,357/2015,11/2016,103/2017,340/2017,519/2018 y modificatorias correspondientes al periodo objeto de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b. Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. También la ley 27541, vigente desde el 23 de diciembre de 2019, introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo del cargo formulado, por lo que propondré revocar la resolución recurrida en los términos indicados.

Con respecto a la regulación de los honorarios, teniendo en cuenta los montos cuestionados, la complejidad de la materia debatida y la labor desarrollada por los profesionales actuantes se establecen los emolumentos en favor de la representación letrada de la parte actora por todos los trabajos realizados en \$ 436.180, equivalente a 48 UMA CSJN Ac. 12/2022, art. 1255 Cód. Civil y Ccial de la Nación, lo expresado por el Alto Tribunal en ocasión de votar la causa: “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa” sent. del 04/09/18), importe al que se le adicionara el IVA en caso de corresponder.(conf. CSJN “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. del 16/06/93) y artículo 2º de la ley 27.423.

Con fundamento en lo expresado, propongo: 1º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 2º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 3º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en \$436.180 equivalente a 48,45 UMA, CSJN Ac. 12/2022 importe al que se agregará IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Walter F. Carnota.

Fecha de firma: 16/06/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35799394#325298387#20220614115443166



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por lo expuesto **el TRIBUNAL, por mayoría**
RESUELVE: 1º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 2º)
Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 3º) Regular los honorarios de
la representación letrada de la parte actora en \$436.180 equivalente a 48,45
UMA, CSJN Ac. 12/2022 importe al que se agregará IVA en caso de
corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese, y oportunamente, remítase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: **AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI**
Secretaria de Cámara

ALP.

